

La ‘ley Celaá’ encara su recta final con un bronco debate sobre el español

ANA TORRES, **Madrid**

La *ley Celaá* encara la recta final para ser aprobada. El texto superó ayer el trámite de enmiendas con el apoyo de PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Bildu tras un debate bronco, sobre todo por los cambios que supone en relación a la concertada y por la polémica sobre el español como lengua vehicular. **PÁGINAS 20 Y 21**

La 'ley Celaá' encara su recta final pese a la polémica por el castellano

PSOE y Unidas Podemos sacan adelante 320 enmiendas pactadas durante dos meses con otros grupos. Las medidas sobre la escuela concertada prosperan tras un bronco debate

ANA TORRES, Madrid

PSOE y Unidas Podemos lograron ayer sacar adelante las más de 320 enmiendas que los últimos dos meses han debatido y pactado con diferentes partidos en la oposición. El dictamen final de la ponencia fue aprobado con el apoyo de ERC, PNV, Más País y Bildu. PP, Ciudadanos, Vox y UPN votaron en contra. 20 votos a favor y 16 en contra. La votación, que se realizó en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, estuvo acompañada de un duro enfrentamiento entre los partidos por dos cuestiones clave: la eliminación del término "lengua vehicular" para referirse al castellano y las limitaciones a la red de escuelas concertadas.

La tramitación de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, ya está más cerca de su recta final. En principio, el jueves se llevará al Pleno del Congreso y requerirá mayoría absoluta para ser aprobada al tratarse de una ley orgánica. Se prevé que, entonces, se repitan los mismos apoyos. De ahí, pasará al Senado. La idea del Gobierno es que quede aprobada antes del 31 de diciembre. Más allá del contenido de las más de 320 enmiendas incluidas en el documento final —que se dividieron en cinco bloques y se negociaron en cinco sesiones diferentes—, la nueva normativa implica una serie de cam-



Isabel Celaá, el día 3 en el Senado. / MARISCAL (EFE)

bios respecto a la ley en vigor, la Lomce, aprobada por el PP en solitario en 2013. Entre ellos, uno de los que más ampollas ha levantado es que la asignatura de Religión dejará de puntuar en Bachillerato y, por lo tanto, no computará para el acceso a la Universidad. Además, se facilitará que el Bachillerato se curse por asignaturas para frenar el abandono e Historia de la Filosofía será obligatoria

en segundo de Bachillerato.

Durante las últimas semanas, la negociación de las enmiendas ha generado una tormenta política que podría afectar incluso a la aprobación de los Presupuestos Generales. El pasado martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades

con lengua cooficial —una de las principales banderas del partido en Cataluña— si quiere su apoyo para los Presupuestos. Ayer, Cs lanzó un nuevo órdago a los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) presentando una enmienda *in extremis* en la que proponían una alternativa: que la nueva ley recoja la obligación de las autonomías con lengua cooficial de impartir al menos el 25% de las clases en español. Una opción que el Gobierno declinó.

Lenguas cooficiales

Socialistas, Podemos y ERC pactaron en una de las enmiendas eliminar la referencia al castellano como "lengua vehicular" en todo el país, un término que introdujo el PP en la Lomce. El tema es especialmente espinoso porque los partidos de la derecha acusan a los socios de Gobierno de sucumbir a las exigencias de los nacionalistas catalanes para obtener a cambio su apoyo en los Presupuestos. Sobre la enseñanza del español en las aulas catalanas ya se ha pronunciado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han fijado que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano.

"Es sorprendente cómo han expulsado o no han reconocido el castellano como lengua oficial del



Alumnos, en el patio de un colegio de Barcelona el 30 de octubre. / CRISTÓBAL CASTRO

Estado y como lengua vehicular", denunció Sandra Moneo, la portavoz de Educación del PP en el Congreso. En su opinión, este cambio en la ley "desprotege" a las familias que residen en Cataluña y



El choque por la educación especial

La nueva ley educativa (Lomloc) propone cambios a medio plazo —en un horizonte de 10 años— en la escolarización de niños con discapacidad con el objetivo de ampliar el número de plazas para este tipo de alumnos en centros ordinarios. La medida ha sido duramente criticada por los centros de educación especial, que temen perder alumnos, y apoyada por colectivos de discapacidad que reclaman la desaparición de ese tipo de escuelas tal y como ha recomendado el comité de la ONU. El 17% de los estudiantes con discapacidad están matriculados en centros especiales. Este tema volvió a enfrentarse ayer a PP y Ciudadanos con los socios de Gobierno. “Hay familias que han decidido que los centros especiales son la mejor alternativa para que sus hijos sean autónomos. Están mejor atendidos”, expuso Marta Martín, portavoz de Cs.

quieren que sus hijos reciban la enseñanza en español. “No les va a quedar más remedio que seguir acudiendo a los tribunales para luchar porque la Generalitat incumple de forma continua las sentencias judiciales”, ha añadido.

Inés Sabanés, del Grupo Parlamentario Plural, acusó a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox de querer “eliminar algunas lenguas cooficiales del país bajo pretexto

de proteger el castellano. “El modelo de inmersión lingüística catalán funciona desde los ochenta, y ningún miembro de sus partidos se quejó hasta que el ministro José Ignacio Wert introdujo en la ley educativa el término lengua vehicular. ¿Qué pasaba antes de 2013, entonces nadie consideraba nuestro modelo inconstitucional?”, les lanzó. Sabanés los acusó de no aportar ni un solo argumen-

to pedagógico y de usar la lengua como arma arrojada. “Es una vergüenza que en el siglo XXI tremos el debate educativo en la lengua y la religión”, añadió.

El diputado de En Comú Podem Joan Mena expuso su trayectoria como un caso de éxito del modelo de inmersión en Cataluña. “Mis padres son andaluces y hoy soy bilingüe y no odio el castellano. De hecho, soy licenciado en

Filología Hispánica. Hay que prestar más atención a los datos: la nota media de los catalanes en la prueba de castellano en Selectividad es un punto superior a la de otras autonomías”, expuso.

La portavoz del PSOE, María Luz Martínez Seijo, incidió en que la nueva ley sí es garantista con las competencias lingüísticas y recordó que el modelo catalán está avalado por la Comisión Eu-

ropea dentro de la llamada metodología AICLE. “La UE tiene como principio proteger las lenguas minoritarias y el PP de Galicia ya recibió el pasado diciembre una reprimenda del Consejo de Europa por no hacerlo con el gallego en las escuelas”.

Las acusaciones más fuertes vinieron de Sergio Sayas, diputado del Grupo Mixto por Navarra Suma. “Este Gobierno ataca cualquier modelo que no sea sectario y que no cumpla con su visión totalitaria de la educación. El nacionalismo obliga a que las lenguas tengan clientes obligatorios; el PSOE sucumbe y lo acepta”.

El segundo foco de los enfrentamientos fue el coto a la concertada (que en España acoge al 26% del alumnado) que suponen algunas de las enmiendas, como la prohibición de cesión de suelo público o las nuevas políticas de escolarización que obligan a las autonomías a crear comisiones que supervisen que los alumnos con necesidades especiales de apoyo se matriculen de forma equilibrada en las redes públicas (que acoge al 79% de alumnos inmigrantes) y concertada. Además, se elimina el término “demanda social” que introdujo el PP en 2013 y que obligaba a las autonomías a planificar las plazas escolares en función de la preferencia de las familias (pública o concertada).

“Quieren un modelo único, laico y público, pero no van a poder porque no tienen el monopolio de la educación y van a topar con el Constitucional, que garantiza la libertad de elección de las familias”, apuntó la popular Sandra Moneo. “La derecha habla mucho de libertad y se olvidan de hablar de oportunidades. Solo apostando por más escuela pública mejorará el sistema, ya que es la que corrige esas desigualdades”, le contestó Joan Mena.